



00000009

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Guatemala, 05 de noviembre del año 2013



Señor
Marvin Alvarado
Director Legislativo Interino
Congreso de la República
Su Despacho

Estimado señor Alvarado:

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es que de conformidad con los artículos treinta y nueve (39), cuarenta (40), y cuarenta y uno (41) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto al presente le remito el **DICTAMEN DESFAVORABLE** de la Iniciativa de Ley número de Registro cuatro mil doscientos nueve, la cual disponía aprobar "**Ley contra la Ociosidad en Centros Privativos de Libertad**", emitido en la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia el día veintitrés de septiembre del año dos mil trece.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Diputado Luis Pedro Álvarez Morales
Presidente
Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia

C.c./ Archivo





00000010

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA

**INICIATIVA 4209-2010. INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR “LEY
CONTRA LA OCIOSIDAD EN CENTROS PRIVATIVOS DE LIBERTAD”.**

DICTAMEN NEGATIVO

HONORABLE PLENO:

Con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diez, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia la iniciativa que dispone aprobar “Ley contra la Ociosidad en Centros Privativos de Libertad”, para su estudio y dictamen correspondiente. Dicha iniciativa se encuentra identificada con el Registro número cuatro mil doscientos nueve (4209) de Dirección Legislativa, y fue presentada por el Diputado Leonel Soto Arango.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Esta Comisión, al desarrollar el proceso de análisis de la iniciativa de ley en mención hace las siguientes consideraciones:

1. Contenido de la Iniciativa:

- 1.1. La iniciativa se compone de diez artículos. Los últimos dos artículos se refieren a la obligación de crear un reglamento y la vigencia.
- 1.2. Se puede decir entonces que la naturaleza, objeto y contenido de la figura que se pretende regular con la iniciativa en mención, se encuentra en los artículos del uno al ocho siendo estos:
 - 1.2.1. “ARTICULO 1. Finalidad. La presente disposición Jurídica tiene como finalidad evitar la ociosidad y la utilización de los impuestos del pueblo honrado en la manutención de los presidiarios, hombre o mujer, en centros privativos de libertad, a efecto de disponer de la fuerza de trabajo de los convictos que estén cumpliendo condena



00000011

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

en centros carcelarios o de rehabilitación social después de haber sido condenados por sentencia firme por un juez facultado legalmente en un juicio jurídico preestablecido”.

1.2.2. “ARTICULO 2. Facultad. Las distintas instituciones del Estado, entidades descentralizadas y autónomas deberán atender y tendrán la facultad de solicitar ante el Ministerio de Gobernación la disponibilidad de realizar trabajos diarios de convictos debidamente custodiados.”

1.2.3. “ARTICULO 3. Trabajos ha realizar. Los convictos tendrán la obligación y estarán en disponibilidad para realizar los trabajos que legalmente les requiera el Ministerio de Gobernación en las instituciones solicitantes. Los trabajos realizables serán:

1. Mantenimiento con mano de Obra Calificada y no Calificada de caminos y carreteras.
2. Mano de Obra Calificada o no Calificada en limpieza de tragantes, tuberías, calles y avenidas en los cascos urbanos y rurales.
3. Mano de Obra Calificada o no Calificada en Recolección de basura.
4. Mano de Obra Calificada o no Calificada en vertederos de basura.
5. Mano de Obra Calificada o no Calificada en mantenimiento y limpieza en hospitales, escuelas, centros de salud, mercados, parques y áreas verdes.
6. Mano de Obra Calificada o no Calificada en Reforestación urbana y rural.
7. Otros que a criterio de la institución autorizante sean viables.”

1.2.4. “ARTICULO 4. Custodia. El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección del Sistema Penitenciario deberá custodiar fehacientemente a los convictos que presten el servicio requerido para evitar posibles fugas, previendo que sea compensatorio al número de agentes que custodien. El reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento respectivo.”



00000012

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

- 1.2.5. "ARTICULO 5. Remuneración. Los trabajos que realicen los convictos serán obligatorios y compensarán los gastos que ocasione el Estado por su permanencia en los centros penitenciarios o carcelarios, privativos de libertad."
- 1.2.6. "ARTICULO 6. Base de Datos. El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Presidios deberá crear y contar una base de datos actualizada, que deberá contar con las generales de cada convicto, hombre o mujer, y su facilidad en el arte, oficio o profesión."
- 1.2.7. "ARTICULO 7. Negatividad. Ningún convicto podrá negarse a prestar el servicio, siendo obligatorio y no podrá ser delegado ni pagado a terceros o por terceros, salvo situación de enfermedad."
- 1.2.8. "ARTICULO 8. Uniformes. El Ministerio de Gobernación deberá ordenar la confección de uniformes especiales para el trabajo que desempeñarán los convictos a efecto de distinguirse fehacientemente de la sociedad, así como equipo necesario para el trabajo respectivo."

2. Sobre la figura de "La Ociosidad en Centros Privativos de Libertad", en relación con la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias y leyes especiales:

Se debe iniciar el análisis de la "Ley contra la Ociosidad en Centros Privativos de Libertad", en armonía con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias y leyes especiales del ordenamiento jurídico guatemalteco para posteriormente compararlo con lo que establecen los Tratados y Convenios Internacionales firmados y ratificados por Guatemala, de forma separada.

La Constitución Política de la República de Guatemala, es el fundamento del Derecho Penal Guatemalteco, en virtud que señala las bases y establece las garantías mínimas al que debe sujetarse el ordenamiento penal para su aplicación. Es facultad del Estado, a través de sus diferentes Organismos, como



00000013

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

ente soberano, castigar toda clase de conducta calificada como delictiva, es decir, definir los delitos, así como, imponer y ejecutar las penas correspondientes o las medidas de seguridad en su caso.

El fin primordial del Derecho Penal guatemalteco es el mantenimiento del orden jurídicamente establecido y su restauración a través de la imposición y la ejecución de la pena, cuando es afectado o menoscabado por la comisión de un delito. Sin embargo otro de los fines principales del Derecho Penal guatemalteco es que el mismo es preventivo y rehabilitador, por lo que es deber del Estado crear todas aquellas medidas y métodos necesarios que pretendan alcanzar la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente, con el fin de devolver a este a la sociedad como una persona útil a ella y para sí mismo. Es por ello que debemos enfocarnos en los siguientes Artículos de la Constitución Política de la República, que regulan lo referente al fin preventivo y rehabilitador del Derecho Penal:

2.1. LIBERTAD E IGUALDAD:

La Constitución Política de la República de Guatemala, en adelante CPRG, establece en su artículo número cuatro:

“Artículo 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.”

Debemos enfocarnos en el artículo citado, puesto que la Constitución Política de la República contiene la prohibición expresa al sometimiento de la servidumbre o condición que menoscabe la dignidad de un ser humano. A pesar que una persona se encuentre privada de



00000014

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

libertad por la comisión de un delito, no implica que se pueda menoscabar los derechos que la constitución les otorga como el derecho de defensa, el debido proceso y el derecho a la libertad restringida e igualdad. La Constitución Política de la República también reconoce que el trabajo es un derecho y no una obligación en su artículo .

La igualdad debe entenderse como un derecho que le garantiza a todos los ciudadanos a ser tratados en condiciones de iguales ante la ley y ante sus obligaciones, además es un límite para que no se atiendan arbitrariamente las situaciones similares.

La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre el derecho de igualdad y citamos la parte conducente de la sentencia de fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos dentro del expediente 141-92:

“...el principio de igualdad plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma; pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratados desigualmente, conforme sus diferencias. ...”

Asimismo el derecho a la libertad es el derecho de las personas para hacer todo aquello que la ley no les prohíbe, sin encontrar ninguna presión o coacción de otras personas o del mismo Estado, teniendo como fin el permitirles el desarrollo total de sus capacidades.

Es por ello que este artículo prohíbe que se limite o menoscabe la libertad, por dicha razón se prohíbe someter a una persona a servidumbre o cualquier otra condición que menoscabe su dignidad, como podría ser la esclavitud y el trabajo forzoso.

De conformidad con la Licenciada Lessette Beatriz Mendoza y Ricardo Mendoza Orantes la servidumbre “...es el vínculo de



00000015

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

dependencia que se establece entre el patrón o amo y el sirviente, éste último encontrándose en una situación de sometimiento e inferioridad. Se encuentra Sancionada en el artículo 202 del Código Penal...”

En dicho artículo se sanciona con prisión al que sometiera a servidumbre o cualquier condición análoga a una persona:

“ARTÍCULO 202.- (Sometimiento a servidumbre). Será reprimido con prisión de dos a diez años, quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes la mantuvieren en ella.”

En consecuencia, pretender implementar un trabajo forzoso aunque sea sobre las personas privadas de libertad conllevaría una contradicción con la Constitución y los principios consagrados en el Código Penal.

El mismo artículo 101 de la Constitución Política de la República establece:

“El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social...”

Debemos entender que el trabajo resulta ser un derecho que cae en la esfera de los derechos subjetivos, es decir que todos tenemos la facultad de trabajar mediante el desempeño de cualquier profesión u oficio libremente elegidos por nosotros, dependiendo de nuestras capacidades, conocimientos o vocaciones, lo único que se prohíbe es realizar una actividad que altere el orden público y no podrán emanar de una orden dictada por autoridad estatal.

Asimismo el artículo 102 de la Constitución Política de la República establece en el inciso b) *“Todo trabajo será equitativamente remunerado...”* por lo que a pesar que, no podría obligarse a una persona a prestar un servicio en forma ad honorem, salvo casos establecidos en la ley, dentro de los cuales no se incluye el trabajo de un convicto como una



00000016

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

forma de pagar su estadía en prisión como motivo de cumplimiento de su condena.

El artículo cuarenta y siete del Código Penal, Decreto número diecisiete guión setenta y tres del Congreso de la Republica, establece que el trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado, asimismo establece que el producto de la remuneración será inembargable y debe aplicarse a : 1. Reparar e indemnizar daños y perjuicios causados por el delito; 2. Prestaciones alimenticias que esté obligado; 3. Contribuir con gastos extraordinarios que sean necesarios para mantener e incrementar su fuente de trabajo y que beneficien al recluso; 4. A formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado.

Como se puede notar si bien es cierto que el Código Penal establece que el trabajo es obligatorio, este trabajo debe ser remunerado y el producto del mismo es puramente beneficio del recluso o bien para pago de daños y perjuicios ocasionados producto de la comisión del delito.

2.2. SISTEMA PENITENCIARIO:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en su artículo diecinueve:

“Artículo 19.- Sistema Penitenciario.. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas:

- a) Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones*



00000017

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos;

- b) Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado; y*
- c) Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad.*

La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata.

El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo."

En virtud del artículo antes citado, el Congreso de la República, emitió el Decreto número treinta y tres guión dos mil seis, que contiene Ley del Régimen Penitenciario y asimismo a través del Acuerdo Gubernativo número quinientos trece guión dos mil once se emitió el Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario.

El objetivo primordial de la Ley del Régimen Penitenciario estipula que el Sistema Penitenciario debe orientar su servicio a reeducar y readaptar socialmente a las personas privadas de libertad que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de una condena, manteniendo dicho espíritu su armonía con lo estipulado en el artículo diecinueve de la Constitución Política de la República, observando que las condiciones y tratamiento mínimos que deben brindarse a toda persona que se encuentre cumpliendo una condena, los mismos deben ser humanos, flexibles y de mínima afectación, de acuerdo con lo estipulando el artículo Constitucional ya citado que toda persona bajo el régimen de privación de libertad, no



00000018

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

pueda ser sometida a "... trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad..."

Asimismo, la Ley del Régimen Penitenciario tutela una serie de principios generales que se orientan a cumplir con la finalidad socializadora y garantizar la legalidad, humanidad y mínima afectación de la actuación penitenciaria.

En el artículo siete de la Ley del Régimen Penitenciario se establece: "... las medidas disciplinarias no contendrán más restricciones que las necesarias para conservar el orden." En tal sentido, el trabajo forzado no constituye una medida disciplinaria que sirva para conservar el orden, pues el mismo cuerpo normativo regula al trabajo como un derecho, desarrollando los principios citados cuando expresa que la labor que desempeñen las personas reclusas "no sea aflictivo y que no encubra una sanción". Dicha disposición otorga las características orientadoras a la finalidad socializadora, estableciendo que debe ser "útil y remunerado", en ese sentido el Estado como garante debe facilitar fuentes de trabajo a través de los entes respectivos, garantizando los derechos conforme a las leyes generales de trabajo del país.

De conformidad con lo anteriormente relacionado, es notorio que el trabajo en forma forzosa como lo refiere la iniciativa en cuestión, riñe con los principios fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, leyes especiales y Tratados y Convenios firmados y ratificados por Guatemala, en los que expresamente se prohíbe el trabajo forzoso como se pretende en dicha iniciativa, lo cual violaría lo preceptuado en la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo jurídicamente inconstitucional la implantación de dicha norma jurídica, por ello la ley de redención de penas si contempla el trabajo pero remunerado y en forma voluntaria, llevando como incentivo la redención de penas.



00000019

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

3. Consideraciones sobre la figura de “Ley contra la Ociosidad en Centros Privativos de Libertad” en relación con Tratados Internacionales:

Se hace necesario iniciar tomando como referencia para el análisis lo que la “---Corte de Constitucionalidad ya ha dicho en relación a que para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, los tratados y convenios internacionales no son parámetro. Para el efecto se cita lo siguiente: “... *esta Corte asentó que los tratados y convenios internacionales -en cuya categoría se encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos- no son parámetro para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, pues si bien es cierto el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención internacional prevalecerían estas últimas; pero ello no significa, como se dijo, que las mismas puedan utilizarse como parámetro de constitucionalidad...*” (Gaceta No. 43, expediente No.131-95, página No. 47, sentencia: 12-03-97).

3.1. Derechos inherentes a la persona humana (Artículo 44 CPRG) y preeminencia del Derecho Internacional (Artículo 46 CPRG).

Los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República fijan los límites y alcances que en relación al ordenamiento jurídico nacional deben de tener los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

En relación a ello ha resuelto la Corte de Constitucionalidad, además de la cita contenida en numeral 3, en el sentido siguiente:



00000020

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

“En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el Derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución...” Gaceta No. 18, exp. 280-90, pág. 99, sentencia: 19-10-90.

3.2. Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

En el marco de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, diversos instrumentos internacionales, firmados y ratificados por Guatemala, expresan que en materia de trabajo de las personas privadas de libertad, el mismo debe ser realizado dentro de un programa estatal que le permita adquirir aptitudes que le preparen para su vida al momento de recobrar su libertad y cumplir con la condena impuesta.

Así pues, podemos notar que dentro de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, se establecen como principios de trabajo de las personas reclusas el que el mismo no sea de carácter aflictivo y que debe contribuir a mantener o aumentar la capacidad y destrezas de los reclusos, este trabajo debe contar con características reconocidas en dicho instrumento, en las cuales se garantiza que la remuneración del trabajo debe ser equitativa y que la normativa interna deberá prever que la administración reserve una parte de dicha remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al momento de éste ser puesto en libertad

Dentro de los instrumentos internacionales que contraría la Iniciativa del Ley No. 4209 son las que se detallan a continuación:



00000021

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

I. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Reconoce en su preámbulo, la igualdad persona y jurídica al establecer: "todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

II. La declaración Universal de Derechos Humanos: Consagra la igualdad en sus artículos 1, 2, 7, los cuales literalmente establecen:

"ARTICULO 1. *Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.*"

"ARTICULO 2. *1.Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.*"

"ARTICULO 7. *Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.*"

III. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica): Establece en su artículo número 5 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. A su vez establece que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.



00000022

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

El artículo número 6, manifiesta la Prohibición de la Esclavitud y la Servidumbre, indicando que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas, en resumen nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.

Finalmente en el artículo número 24 establece que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.

IV. Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio:

Establece en el artículo 2 que la expresión "trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".

Siendo claro este Convenio ratificado por Guatemala, en el sentido que es prohibido someter a una persona a un trabajo forzoso entendiéndose como tal aquel al que una persona es sometido sin que medie su voluntad.

Asimismo en su artículo 1 establece que todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que haya ratificado el Convenio en mención, se obliga a suprimir, lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas.

4. CONCLUSION:

Por lo anteriormente expuesto, es notoria la inviabilidad que podría tener el proyecto de ley relacionado en Guatemala, ya que el objetivo del misma es obligar a las personas que se encuentran privadas de libertad a que realicen trabajo obligatorio sin recibir remuneración a cambio,



00000023

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

aduciendo que con el trabajo forzoso de los reclusos los recursos de la Nación no se erogarían en vano, toda vez que los mismos tendrían que ganarse su alimentación, esta situación caería en la figura prohibida en la Constitución Política de la República, sobre la servidumbre y situaciones análogas, ya que menoscabaría la dignidad del convicto, que aunque se encuentre limitado en su libertad por haber cometido un delito, esto no implica que pueda ser sometido a tratos inhumanos o a una esclavitud o cualquier tipo de servidumbre, es más, la ley de redención de penas vigente en Guatemala, establece un sistema de reducción de la condena por el trabajo pero remunerado. Además es importante señalar que la Iniciativa de Ley No. 4209, contraría el método de reeducación y reinserción social de las personas condenadas, contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, Ley del Régimen Penitenciario y su respectivo Reglamento.

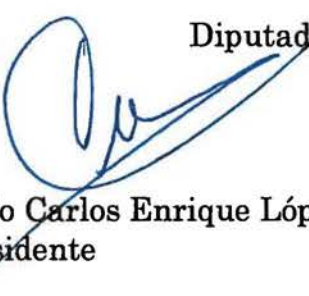
En virtud que la presente Iniciativa a criterio de la Comisión riñe y tergiversa con principios, derechos y garantías que establece la Constitución Política de la República, Ley del Régimen Penitenciario, Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario y en Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y laborales firmados y ratificados por Guatemala, hacen que la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia proceda a **DICTAMINAR NEGATIVAMENTE**, para que sea el Honorable Pleno el que decida sobre el mismo.

**DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE
REFORMA AL SECTOR JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA,
EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.**



00000024

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*



Diputado Luis Pedro Álvarez Morales
Presidente


Diputado Carlos Enrique López Girón
Vicepresidente


Diputado Juan José Porras Castillo


Diputado Álvaro González Ricci


Diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera


Diputado Gustavo Adolfo Echeverría
Mayorga


Diputado Manuel de Jesús Barquín Durán



00000025

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Diputado Selvin Boanerges
Velásquez

Diputado Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán

Diputado Leonardo Camey Curup